Responsabilidad del Estado, por haber tomado para su servicio una lancha de propiedad particular.

Excmo. señor:

El Fiscal dice: que en la prosecución de este juicio no se han observado los requisitos exigidos por la ley. No está arreglada su tramitación á la de 21 de Diciembre de 1839 sobre juzgados y tribunales de hacienda; porque, cuando se inició, se hallaban suprimidos por la Dictadura, ni tampoco á las disposiciones del Código, como es fácil demostrarlo con la simple lectura de autos.

El juicio ha tenido una tramitación viciosa, en el que no se encuentra demanda en forma contra el Estado, ni contra el comandante Valdivieso. El recurso de f. 8 de don Eduardo Olmos es la base de cuánto se ha practicado, y en él no se encuentra ninguna de las condiciones que, según el Código de Enjuiciamientos en sus artículos 580 y siguientes, debe contener toda demanda.

En él pidió Olmos que se admitiess la prueba ofrecida á f. 5 y 6 y "que el juzgado se dignase dar á la causa la "tramitación que le corresponde admitiéndosele la prueba que solicita." Así es que no hay demanda contra el Estado, ni contra persona determinada, lo que hace nulass las resoluciones expedidas en segunda instancia según el inciso 3º art. 1649 del citado Código. Sin embargo, dándose por supuesta la responsabilidad de Valdivieso, ó no se sabe de quien, se ha procedido á averiguar cuál era el valor de la lancha perdida, que debía ser objeto secundario, porque ante todo debía conocerse al demandado ó responsable. Siguiendo, pues, sobre estos antecedentes un juicio anómalo entre Olmos y el comandante Valdivieso, se ha resuelto, en primera instancia, que el Estado es responsable por una lancha de veinte toneladas, en regular estado de servicio, cuyo importe fijarán los peritos que nombren los interesados. Es decir que se han declarado dos cosas: 1º la responsabili-

dad del Estado, punto que no ha sido cuestionado; y 2º la tasación de la lancha por peritos, que no la pueden tener á la vista y solamente por declaraciones inciertas.

Después de notados estos defectos en la forma del procedimiento, el Fiscal examinará la cuestión en su esencia.

Cualquiera que por sus hechos, descuido ó imprudencia, cause un perjuicio á otro, dice el art. 2191 del Código Civil, está obligado á subsanarlo. Entre las personas que enumera, y que deben hacerlo por otro, incluye á los padres, al guardador y al maestro; en general al que los tenga bajo su cuidado. El Gobierno no es responsable por los daños que causen sus subalternos: cuando procedan por orden superior, entonces están exentos los ejecutores aun de la responsabilidad criminal.

Del informe de f. 1 vta., expedido por el comandante Valdivieso, consta que él mandó tomar la lancha para el servicio del Estado, con el objeto de conducir carbón á los buques; que mandó al guardián que fondease dicha lancha del modo más seguro mientras él se dirigía á la de San Lorenzo, y que, al regresar, se le presentó Olmos, reclamando la lancha por no estar en el lugar donde había sido fondeada. Estas circunstancias bastan para demostrar, que la responsabilidad del Gobierno es ninguna, que es incierta aun la del mismo Valdivieso, pues no son conocidos los accidentes que contribuyeron para la pérdida de la lancha, ó si fueron inevitables, casuales ó voluntarios ó si provino del mal estado en que se encontraba. Pero cualquiera que fuesen los motivos ó causas de la pérdida de la lancha, no hay responsabilidad directa del Gobierno, que nunca puede responder de la conducta ó hechos de sus empleados, ni de los abusos ó descuidos de los subalternos, sobre los que recae la responsabilidad, y con mayor razón, cuando han procedido por su propia voluntad y dirección. Así está declarado por varias leyes y resoluciones, con ocasión de las reclamaciones dirigidas aun en asuntos de relaciones exteriores y de intereses de súbditos extranjeros.

La responsabilidad es directa y personal, tanto en lo civil como en lo criminal, del que causa el daño, sin que haya razón para ocurrir al Gobierno ó para condenar al

Fisco, por la incuria, torpeza ó arbitrariedad de sus empleados, y menos puede serlo, cuando, como en el presente caso, no ha sido demandado en la debida forma, como ya se ha dicho.

Hay que tener presente una última razón. Todos los artículos tomados en 1865 y 67 para la Defensa nacional, ó para el servicio del Ejército Constitucional, pertenecen al monto de la deuda pública, mandada reconocer por la ley de 4 de febrero de 1869. Debiendo ocurrir al Gobierno los dueños ó acreedores para ser pagados, previa la liquidación y rectificación de las respectivas Juntas, y observándose las demás circunstancias que en esta se expresan. Habiendo, pues, una ley especial sobre el particular, y estando autorizado el Gobierno para resolver todos los expedientes que se organizasen por reclamos de empréstitos, ó suministros, no ha debido ni debe ocurrirse á otro poder para solicitar el reconocimiento, sino cuando sea necesario el esclarecimiento de los hechos ó cuando el Gobierno someta el asunto á la decisión judicial, por que así lo exijan otros motivos fundados.

Por lo expuesto, el Fiscal, concluye opinando por que V. E. declare nulas las sentencias de primera instancia de fs. 33 vta. y la confirmatoria de fs. 53, y que, reformando ésta y revocando aquella, declare sin lugar la demanda de Olmos, dejándole su derecho á salvo para que lo ejecute contra quien viere convenirle.

Lima, Julio 22 de 1871.

PAZ SOLDÁN.

*Lima, Julio treinta y uno de mil
ochocientos setenta y uno.*

Vistos; con lo expuesto por el señor Fiscal: declararon no haber nulidad en la sentencia de vista pronunciada

por la Ilustrísima Corte Superior del Departamento en primero del presente por la que se confirma la de primera instancia de fojas treinta y dos vuelta en que se declara responsable al Estado por una lancha de veinte toneladas en regular estado de servicio, cuyo precio se fijará por peritos que nombren las partes, y los devolvieron.

Ribeyro.—G. Sánchez.—Cossio.—Alvarez.—Muñoz.—Arenas.—Oviedo.

Se publicó conforme á la ley, de que certifico.

Manuel L. Castellanos.

Mandamiento de prisión en forma

Excmo. señor:

En esta grave causa, cuya formación decretó el Supremo Gobierno en 5 y 7 de junio, el coronel don Juan Manuel Garrido se ha querellado criminalmente contra los tres jefes del batallón Pichincha, coronel graduado don Silvestre Gutiérrez, teniente coronel don Manuel Palomino y sargento mayor don Pedro Palacios, y contra los capitanes don José Cirilo Cárdenas y don Guillermo Cárdenas.

Se les imputa haber atentado, el coronel Gutiérrez, contra la libertad del coronel Garrido, hasta hacerle arrestar en el cuartel de dicho batallón por doce ó catorce horas, y haber los otros dos jefes y los dos capitanes maltratado-le con doscientos azotes durante la ausencia, en el pueblo de Surco, del primer jefe, pero de orden suya, en el día cuatro del citado mes de junio.

Los enjuiciados rechazan como impostura habitual y